

CONTRA LA CORRIENTE: POLÍTICA MUNICIPAL ALTERNATIVA EN EL CONO SUR*

Joachim Becker**

Resumen: al fin de los ochenta, la izquierda ganaba la elecciones municipales en Montevideo y Porto Alegre. En ambos los dos casos, el nuevo gobierno municipal emprendió una reforma del estado local. Se discuten los logros y límites de las políticas alternativas municipales en un contexto más largo histórico y espacial.

Palabras-clave: gobiernos locales; izquierda

Introducción

Un tanto ocultas prosperan algunas flores rojas de política alternativa local en los parajes neoliberales del Mercosur. Su prosperidad se manifiesta de manera particularmente estable en Montevideo, la capital uruguaya, y en Porto Alegre, la metrópoli del Estado federal de Rio Grande do Sul, en el extremo sur del Brasil. Desde hace más un decenio la izquierda constituye el gobierno municipal en ambas ciudades, lo que resulta bastante inusual en el contexto latinoamericano. Y su ejemplo se difunde en la contigüidad. A fines de 1998 fue elegido gobernador un representante del Partido dos Trabalhadores (PT) en Rio Grande do Sul aunque el PT no consiguiera consolidar este logro electoral en las elecciones siguientes. En el Uruguay, el Frente Amplio (FA) duplicó su número de votos desde el término de la dictadura y emergió como la tienda política más votada. Su candidato a la presidencia

* Traducción del Aleman: Hans Huber Abendroth.

** Wirtschaftsuniversität Wien, Viena/Austria.

fracasó por poco en la segunda vuelta electoral en diciembre de 1999.

Esta evolución política va en contra de la tendencia predominante, no únicamente en América Latina. Los intentos de hacer una política municipal alternativa representaron la excepción y estas excepciones fueron mayormente de carácter pasajero. De ahí que se nos plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles factores posibilitan a la política municipal desviarse –por la izquierda– del patrón político nacional? Al mismo tiempo nos proponemos analizar especialmente cómo el patrón de desarrollo económico prevaleciente y la inserción en una región limitan o más bien amplían las posibilidades de una política municipal alternativa. Nos referiremos a estas preguntas desde la perspectiva de la economía política. Las posibilidades de una política municipal alternativa parecen ser mayores cuando el patrón de desarrollo regional es heterogéneo y de tal manera pueden ser llevadas a adquirir preponderancia las especificidades locales. Pero ésta es solamente una condición necesaria y no así suficiente. Espacios políticos genuinos tan sólo son el producto de un contexto caracterizado por un bloque de poder nacional débil que no es capaz de formular un proyecto hegemónico. En tal vacío pueden incursionar entonces fuerzas alternativas (véase Becker/Novy 1999a, 1999b).

Aun así emerge la pregunta acerca de cómo estas fuerzas aprovechan ese espacio abierto. ¿Buscan expandir los márgenes de acción de la política comunal, por ejemplo a través de un fortalecimiento de la capacidad fiscal municipal, o antes se empeñan en explotar inmediatamente los éxitos electorales locales como trampolín para aterrizar en el plano nacional? En un caso apuntarían más bien a la descentralización y en el otro a la centralización. ¿Incrementan la participación política en la ciudad o se limitan a una “mejor” administración local, es decir, a una variante izquierdista de la “good governance”? La magnitud del espacio abierto también adquiere cierta relevancia para una reforma municipal de izquierda. Un relativo decaimiento económico de la ciudad y un potencial financiero

correspondientemente debilitado restringen el potencial margen de acción. Pero esta limitación no es de carácter absoluto. Una política municipal de izquierda también puede comprender una estrategia económica que fortalezca la economía local. De esta forma, la relación entre estrategia de izquierda, desarrollo económico local y la formación de un bloque sólido es de particular importancia para una política alternativa.

Nos parece esclarecedor un análisis de estos conjuntos de preguntas mediante una comparación entre Montevideo y Porto Alegre. Con aproximadamente millón y medio de habitantes, ambas ciudades tienen casi el mismo número de habitantes, un entorno cultural ciertamente comparable y están localizadas dentro del espacio económico del Mercosur. Al mismo tiempo contrastan en aspectos centrales: Porto Alegre cuenta con una periferia industrializada y no así la capital uruguaya. La primera ciudad forma parte de un extenso país descentralizado, Montevideo es la ciudad principal de un pequeño estado centralizado. El sistema partidario es mucho más estable en Uruguay que en Brasil (Moreira 2000: 128). El PT apuesta por el fortalecimiento de sus bastiones locales (y regionales), el FA ve en el gobierno municipal más bien una suerte de trampolín para llegar al gobierno central. Estas opciones estratégicas distintas tan sólo pueden ser comprendidas a partir de su trasfondo histórico. Es por ello que la discusión de la política local alternativa del presente va precedida de un bosquejo del desarrollo económico y político urbano en su respectivo contexto regional.

Montevideo

En Uruguay, el siglo XIX se caracterizó por el agudo contraste socioeconómico y sociopolítico entre el emporio comercial de Montevideo y el *hinterland* agrario. La capital se convirtió en un importante puerto ultramarino no solamente para el propio país sino también para la región entera. Empero, en el

transcurso de esa centuria, Montevideo perdió relativamente en importancia. Con la consolidación de los estados territoriales las fronteras arancelarias y monetarias dividieron progresivamente el espacio económico, de manera que la ciudad capitalina abandonó parte de su *hinterland*, especialmente a Buenos Aires. El puerto de ésta ciudad también fue ampliado y modernizado mucho antes que las instalaciones en Montevideo (Jacob 1996). De esta forma, la urbe uruguaya fue relegada aún más y persistentemente a un segundo plano. Una cierta compensación fue generada por la intensificada habilitación de la infraestructura en el Interior, la que estuvo primordialmente en manos del capital británico (Jacob 1996). El capital británico también desempeñó un papel importante en la construcción de infraestructura urbana en Montevideo, si bien en este caso además se generaron impulsos desde el gobierno central y local. De especial importancia fue la construcción de una red de tranvías, la que sentó las bases para la expansión de la ciudad y para una lucrativa especulación inmobiliaria. Esta especulación en bienes raíces se ajustaba muy bien a la inclinación rentista de los círculos dominantes (Cocchi et al. 1980: 15ss). Con el crecimiento de la ciudad surgió además una pequeña industria en el último cuarto de siglo. Ella pertenecía principalmente a inmigrantes y estuvo orientada hacia las necesidades de consumo de la población urbana (Jacob 1981, Millot/Bertino 1996: cap. VII). Políticamente, sin embargo, marcaba el compás la burguesía comercial, la que estaba íntimamente ligada a los intereses británicos (Winn 1975).

Frente al bloque de poder urbano se constituía uno rural bajo el liderazgo de los grandes ganaderos. En términos político-partidarios estos bloques se organizaron como Colorados y Blancos, respectivamente. El conflicto fue terminado transitoriamente mediante una descentralización y una repartición territorial del poder hacia fines del siglo XIX. Entre 1903 y 1904 el bloque de poder rural intentó imponerse al urbano por última vez a través de la vía militar, siendo derrotado de manera decisiva en el intento (Mendez Vives 1992: 84ss, 115ss).

Bajo el mando de José Batlle y Ordóñez, los Colorados aprovecharon la victoria armada para encaminamientos políticos de largo alcance. En la reforma del Estado buscaron protegerse de dos facciones: por un lado del bloque rural y, por el otro, del movimiento obrero que iba emergiendo en Montevideo, el que ya había dado unas vigorosas señales de vida hacia fines del siglo XIX. Dado que el frente rural había surgido de centros de poder regionales, los triunfantes Colorados buscaron la prevención en una centralización del Estado. Al mismo tiempo buscaron incluir intereses divergentes en un proyecto estatal integrador. Intentaron ampliar espacios a través de un ensanchamiento del sector público que había de dar impulsos al desarrollo económico.

Haciendo también referencia al bienestar común –y como inequívoca oferta a la clase trabajadora urbana–, el gobierno emprendió extensas reformas sociales como la introducción de la jornada laboral de ocho horas y del seguro social. Al respecto se adelantó a varios países europeos (Finch 1993: 223, Filgueira/Filgueira 1994). Este proyecto de Estado revela algunas paralelas con la dictadura del Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) en el vecino Estado federal Rio Grande do Sul (Targa 1998a, 1998b). A la vez de diferenciaba marcadamente de éste por su convicción en parlamentarismo y por su base social. No obstante, el proyecto de reforma de Batlle tenía sus claros límites. El capital extranjero mantuvo su amplia predominancia y la prosperidad del país permaneció dependiendo en sumo grado de la exportación de recursos primarios. Ambos factores habrían de revelarse pronto como un freno a la reforma. El bloque de poder rural fue integrado en una posición subordinada en los años mozos del siglo XX. Las ofertas materiales a la clase obrera urbana y la confrontación ideológica pasaron a un segundo plano. Ahora la incorporación se producía mediante prácticas clientelistas en el aparato estatal y en las empresas públicas (Costa Bonino 1988: 26). Si bien los proyectos de infraestructura robustecieron el potencial de la economía, no cambiaron de rumbo al desarrollo económico. La

inversión pública en Montevideo fue destinada en gran parte al embellecimiento de la ciudad, como la construcción de una costanera. La idea de una “ciudad jardín” armonizaba perfectamente con las portentosas inversiones privadas en bienes raíces. Ora estaba en boga el frente costero. Aquí se expandió la ciudad y se desarrolló el turismo. Los casinos pertenecientes a la ciudad atrajeron una clientela acaudalada, que incluso venía de la vecina Argentina (Jacob 1988).

Con la gran crisis de los años treinta fueron gravemente afectadas las exportaciones y las posibilidades de importación del Uruguay. El modelo de desarrollo orientado hacia afuera, basado en la exportación de productos pecuarios, fue despojado de su fundamento. El gobierno, que por un tiempo se tornó autoritario, procuró controlar la crisis de balanza de pagos mediante medidas incisivas como un control de divisas, devaluaciones y una moratoria temporal y parcial del servicio de la deuda externa (Millot et al. 1973: 88ss., Jacob 1983, Bértola 1991: 169ss). El sector económico orientado hacia el mercado interno, tradicionalmente descuidado, disfrutó de hecho de una fuerte protección. A falta de alternativas, se canalizaron nuevas inversiones hacia la industria que atendía el mercado nacional. Entre los inversionistas se encontraban ahora también los latifundistas y el capital comercial. Se formaron grupos altamente oligopolistas con entrelazamientos entre la industria, el latifundio y la banca. De esta manera sufrió también una alteración el bloque de poder (Stolovich et al. 1987). El proceso de industrialización se concentró de forma extrema en Montevideo. En 1960 un 77,8% de la producción industrial bruta del Uruguay recaía en la metrópoli (Anichini 1969: 20, Cuadro X). La ciudad vivió una fase de prosperidad y de diversificación económica, en especial en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Desde principios de la década de 1940 también participaron del auge los obreros. De un lado, se vio fortalecido el poder de negociación de los sindicatos a través de “consejos salariales”, por otra parte aquéllos fueron absorbidos por la vía neocorporativa. Los costos de reproducción de la fuerza laboral

urbana fueron disminuidos a partir de 1943 a través del control estatal del arriendo que perduró por tres décadas (Capandeguy/Crocco 1994: 146). En el campo todo permanecía como siempre.

En modelo orientado hacia adentro entró en crisis ya a mediados de la década de 1950. El auge de las materias primas llegó a su fin con el término de la Guerra de Corea. Las importaciones industriales resultaron menos importantes que en el período previo a la guerra. En vista de un pronunciado aislamiento apenas existían posibilidades de exportación hacia los países vecinos. Dada la prevaleciente distribución del ingreso, el mercado interno estaba bastante agotado; la pequeña dimensión del país desnudó esta limitación de manera especialmente rápida. De esta forma, el modelo económico se encontró con limitaciones internas y externas (Bértola 1991: 233ss). Las inversiones se reorientaron hacia el sector financiero e inmobiliario. Transitoriamente, sin embargo, faltaron recursos financieros para la especulación en bienes raíces, lo que estaba relacionado con la inestabilidad del sistema financiero y monetario. Los bancos se aventuraron a operaciones muy riesgosas ocasionando serias crisis bancarias en los años 1965 y 1970/71. La fuga de capitales alcanzó proporciones endémicas, la economía empezó a dolarizarse y la deuda externa reventó (Calloia et al. 1984, Noya et al. 1998). El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó una política social regresiva, la que también correspondía con los pretensiones del bloque nacional de poder. El desarrollo de la ciudad sufrió igualmente de un retroceso social. Grandes segmentos de la población empobrecieron. La segmentación social de la urbe fue forzada además por Plan de Desarrollo Urbano del año 1956 y por la praxis política (Kroch 1998: 10), formándose tres segmentos identificables con relativa claridad:

- el centro de la ciudad, bien dotado en términos de infraestructura, pero marcado por el decaimiento social

- el emergente frente costero con zonas residenciales para las capas altas
- los nuevos barrios marginales con infraestructura deficiente en los límites urbanos (Altmark et al. 1998).

La estratificación fue un tanto amortiguada por el control de los precios de los alquileres, aún persistente.

El poder aglutinante del bloque nacional perdió fuerza. No podía ofrecer perspectivas de ascenso a los trabajadores urbanos y a la clase media, ni las posibilidades de absorción individual a través del clientelismo eran ya tan grandes como en el pasado. Los movimientos nacionales de liberación en el Tercer Mundo y los movimientos estudiantiles desde Berkeley y México hasta París y Marburgo le dieron nuevos impulsos a la izquierda autónoma, concentrada mayormente en la lucha parlamentaria y extraparlamentaria y, de forma reducida, en la guerrilla urbana. Dentro de los movimientos sociales sobresalieron aquéllos compuestos por escolares y universitarios, como también los sindicatos (Nahum et al. 1994: 161ss, Zubillaga/Pérez 1996: 26 ss). A mediados de los años sesenta los sindicatos dieron un gran paso adelante con la instalación de un organismo central común, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Las organizaciones sindicales se comprendían como más que una mera agencia para la obtención de salarios más altos, cuyo índice, dicho sea de paso, había caído de un valor de 100 (en 1957) a tan sólo 70,2 en 1972 (Cancela/Melgar 1985: 17, Cuadro 1). Una mejora la asociaban únicamente a una transformación social de fondo. En el Primer Congreso de la CNT en 1969 se dice: “La CNT ha definido esta batalla no sólo como batalla sindical, sino como una batalla política en la que se confrontan dos orientaciones: una la del FMI, la de la oligarquía y el imperialismo; y la otra de la CNT con un programa de soluciones nacionales “ (citado conforme a Nahum et al. 1994: 164). En 1971 la izquierda partidaria siguió el ejemplo sindical y se unió

en el Frente Amplio, cuyo horizonte abarca desde la democracia cristiana hasta la izquierda radical. No habiendo alcanzado los dispersos partidos de izquierda nunca más de un 10% de los votos, el FA alcanzó de entrada un 18,3% de la votación a nivel nacional en las elecciones de 1971, en Montevideo incluso un 30,1% y en el Interior solamente un 9,6% (Nahum et al. 1994: 78 y 80, Cuadros 1 y 2). El resultado electoral demuestra el muy desigual arraigo regional del movimiento de emancipación. Su centro era Montevideo, en el Interior permaneció más bien débil. A pesar de su anclaje desproporcionado en la ciudad capital, la meta de la izquierda no consistió en la creación de una posición de poder de orden local, sino que estaba representada por la conquista del comando central del estado nacional. La fijación en el Estado nacional la compartía con otros movimientos reformistas y radicales en América Latina, precisamente también en el Cono Sur. Esta orientación fue concluyente en la medida en que pretendía hacer del estado nacional en vías desarrollista el punto de partida de sus estrategias de transformación nacionales.

De carácter uniforme fue igualmente la reacción de la derecha de los países del Cono Sur frente a la inminente crisis económica y estatal: autoritarismo y golpe militar así como la transición a un modelo de economía liberal (O'Donnell 1996). En el Uruguay, los militares procedieron al golpe en 1973. El alzamiento se dirigió en contra del movimiento de liberación (urbano). Desactivaron los órganos de representación parlamentarios, prohibieron los partidos políticos y persiguieron a las fuerzas de izquierda. También centralizaron el Estado, suspendieron la autonomía comunal; los departamentos, y asimismo Montevideo, perdieron sus competencias impositivas (Risso Ferrand 1989: 22). El régimen militar impuso una política económica más liberal, encauzada hacia afuera. En un inicio fomentó una más pronunciada orientación hacia las exportaciones y luego de una estabilización de la balanza de pagos, la acumulación monetaria. La segunda variante de la política económica encerraba una moneda sobrevaluada. Altas tasas de interés deben complacer a los inversionistas nacionales y

atraer capital extranjero de manera que los resultantes déficit en cuenta corriente puedan ser cubiertos. Llegado el momento en que el cántaro de la deuda se ha acercado tantas veces al agua que se raja, le suceden una devaluación y un forzamiento de las exportaciones. Para el Uruguay, esta alternancia es característica al menos desde principios de la década de 1970 (Becker et al. 2001: 51 ss., Cancela/Melgar 1985, Macadar 1992, Astori 1996). Ambas variantes de política económica exigen presión sobre los salarios. Pero, más allá de su carácter social regresivo, también se pueden comprobar algunas otras constantes de la estrategia económica.

Los militares uruguayos buscaron la colaboración con los países vecinos no solamente en lo referente a la represión (Mariano 1998), sino también en el campo económico. En 1974 negociaron un acuerdo comercial bilateral con la Argentina y en 1975 uno con el Brasil. Posteriormente esta política sería continuada en 1991 en el Mercado Común del Sur (Mercosur), ya en el marco de un gobierno civil. Las exportaciones regionales estimularon principalmente algunos sectores agroindustriales. Por el contrario, la industria orientada hacia el mercado interno y ubicada en Montevideo, fue seriamente afectada con la apertura externa (Altmark et al. 1998). Fueron más bien dos subsectores los que crecieron en saltos y dependiendo del respectivo patrón de regulación dominante, el de los servicios financieros y el de bienes raíces, lo que debe ser catalogado como expresión de estancamiento económico. El sector bancario, concentrado en Montevideo, siguió caracterizándose por su susceptibilidad a las crisis y ha sido objeto de una fuerte reducción de puestos de trabajo desde 1981. Está altamente internacionalizado y –con la excepción de los bancos estatales– no está orientado al negocio crediticio con las empresas de producción uruguayas. Por otro lado, este sector también atrae capital de evasión desde la Argentina (Lopez Gallero 1993, Caumont 1998). La especulación en bienes raíces aportó con un 20,3% al valor bruto agregado en Montevideo (Convenio UTE - Universidad de la República s.f.: Cuadro A 14).

La importancia relativa de Montevideo dentro de la economía uruguaya ha disminuido a consecuencia de las reestructuraciones que se dieron en los dos últimos decenios. Su participación en la creación bruta de valor descendió de un 87,3% en el año de 1978 a tan sólo un 60,0% en 1993 (Vaillant 1996: 118, Cuadro 3, Convenio UTE - Universidad de la República s.f.: Cuadro A4). Prescindiendo de un *hinterland* relevante en términos económicos, Montevideo ha perdido importancia económica incluso en el marco del Mercosur, si bien el secretariado de esta asociación se halla domiciliado en la capital del Uruguay. En los últimos años este fenómeno se viene expresando, entre otros, en el hecho de que cada vez menos líneas aéreas se dirigen directamente a Montevideo, buscando en su lugar la conexión vía Buenos Aires.

La dictadura militar, si bien no del todo monolítica (Dressler 1978), condujo a una polarización social que perdura hasta hoy en día. Al verse suspendidos los partidos como representación de intereses durante la dictadura, el empeoramiento de la situación social permitió lentamente el ascenso de nuevos actores al escenario político. “Se trataba, en general, de movimientos preferentemente urbanos, de base territorial, orientados en torno a reivindicaciones sociales básicas (en áreas como la vivienda, la salud o la alimentación), surgidos como reflejo de formas de solidaridad ante la política autoritaria y el agudo apobrecimiento popular” (Caetano/Rilla 1996: 69, Equipo 23 1995). Estos alcanzaron su cúspide con las movilizaciones de los años 1983/84. Los sindicatos también desempeñaron un protagonismo importante en el marco de la resistencia a la dictadura. A su vez, los movimientos sociales crearon espacios para los partidos, los que en la transición pactada hacia el parlamentarismo fueron parte negociadora central frente a los militares. El sistema de partidos fue restablecido a la misma forma en que había existido antes de la dictadura. A diferencia de la Unidad Popular en Chile, el Frente Amplio logró conservar su unidad a lo largo de los difíciles años del período autoritario.

Los partidos tradicionales, Colorados y Blancos, retomaron la batuta en el plano nacional y continuaron, en sus rasgos esenciales, la política económica de la dictadura militar. En cierto modo incluso llevaron esta política aun más hacia la derecha. Buscaron abrir nuevas posibilidades de inversión al capital mediante la privatización de empresas estatales y del seguro social, tal como correspondió con las recomendaciones de los organismos internacionales (como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo) y con la praxis de los países miembros del Cono Sur (Argentina y Chile), y luego también del Brasil. Esta política se enfrentó a una resistencia más fuerte que en otros estados latinoamericanos. En 1992 la izquierda inició un referéndum en contra de las privatizaciones, el cual ganó claramente. De esta forma fue obstaculizada, pero no detenida, la política de privatización. La privatización parcial del seguro de pensiones no pudo ser impedido por la izquierda, pero sí fue atenuada por ella.

En las controversias sostenidas sobre la privatización salió a relucir cuan fuerte es todavía la herencia del estatismo en el Uruguay. Amplios segmentos de la población le atribuyen un papel importante al Estado como agencia de desarrollo e instrumento para el establecimiento del equilibrio social. La tradición del estatismo y el menor grado de atomización en comparación con otros países del Cono Sur, le ofrecen a la izquierda unos espacios de acción relativamente grandes. Eso sí, los movimientos sociales pasaron a un segundo plano con relación a los partidos organizados en la colación izquierdista del FA. No obstante, han preparado el terreno en más que un sentido para el avance del FA en las elecciones. Una etapa importante fue la elección del candidato del Frente Amplio, Tabaré Vazquez, como alcalde de Montevideo en el año de 1989. De esta manera la capital se convirtió en cierto contrapeso de izquierda frente a los gobiernos centrales de corte liberal derechista.

Elementos centrales de la política municipal del Frente Amplio fueron una reforma gubernamental y un fortalecimiento del “consumo público”. Sin una reforma del Estado local una política nueva parecía impensable. La existente administración municipal, cuyo personal debía sus puestos mayormente al favoritismo de los Colorados que habían gobernado por décadas enteras, estaba “degradada en todo sentido”, como lo expresa la diputada por el FA, Margarita Percovich, en una entrevista con el *ila* (nro. 217/1998: 17). Una parte de los empleados municipales resultó ser absolutamente incompetente para los cargos que ocupaba. Jefes administrativos había por doquier. Estos consideraban sus puestos permanentes obtenidos gracias a la predilección política como una especie de sobresueldo y brillaban por su frecuente ausencia. En efecto, la reforma administrativa generó conflictos con el sindicato de los empleados públicos. Pero el gobierno municipal pudo ganar puntos por el hecho de promover la reforma de forma ofensiva a manera de una descentralización de la administración municipal. El primer paso consistió en el establecimiento de 18 Centros Comunales Zonales, a los que fueron transferidos poco a poco 200 procesos administrativos y servicios. Esta descentralización administrativa es complementada en 1993 con un ingrediente político, la creación de juntas locales y consejos vecinales. En las juntas locales están representados tres miembros de la coalición de gobierno y dos de la oposición. Los consejos vecinales son elegidos, pero únicamente están dotados de una función consultiva (Veneziano Esperón 2001). Según Eduardo Gudynas, ambos gremios habrían evolucionado en sentido contrario (conferencia en Viena, 28 de octubre de 1999). Los primeros estarían orientados por el criterio político-partidario y buscarían restar importancia los conflictos por una razón de partido. Por el contrario, los consejos vecinales estarían más bien apartados de vínculos partidarios. Pero, dado que éstos tan sólo tienen competencias limitadas, algunos grupos locales intentarían lograr ciertos objetivos a través de contactos directos con la administración municipal central. Por lo tanto, no puede

sorprender que el secretario de la Junta Local salió como la figura clave de los CCZ. Es un funcionario de confianza del intendente que articula las estructuras descentralizadas y centralizadas del municipio (Veneziano Esperón 2001: 140).

El gobierno municipal del Frente Amplio apostó por una reforma del Estado local, pero no así por un cambio referido a las competencias correspondientes al gobierno central y a los departamentos. Al respecto, la falta de autonomía en la política fiscal así como de capacidad financiera resultaron ser restricciones de peso. Iniciativas para fortalecer el potencial financiero municipal, como por ejemplo la introducción de un canon de aguas residuales, fueron bloqueadas por instancias del Estado central. Financieramente, el gobierno central mantuvo a Montevideo de la rienda. De forma especialmente restrictiva actuaron los gobiernos colorados debido a que este partido, con una base más bien urbana, se ve particularmente amenazado por el avance del Frente Amplio (Brecha, 19 de marzo de 1999: 5). La persistente fijación de la izquierda en el Estado central se podría explicar por el hecho de que persigue un proyecto societal y económico que gira en torno al Estado nacional y porque confía en unas opciones reales de ascenso al poder en un tiempo relativamente cercano.

De suma importancia para un posterior avance en el plano nacional debería ser el éxito o fracaso político de carácter local de la política municipal del Frente Amplio. El primer gobierno comunal del Frente bajo el socialista Tabaré Vazquez puso su acento político también en la prolongadamente descuidada periferia de la ciudad, donde buscó mejorar la dotación de infraestructura. Los principales proyectos urbanos fueron la construcción de policlínicas y la ampliación del sistema de canalización. El segundo gobierno municipal, presidido ahora por Mariano Arana, un representante de la vertiente Artiguista, se concentró más bien en el centro de la ciudad y en la planificación urbana. Muy visibles fueron, por un lado, la refacción de espacios públicos como parques y plazas, La Rambla (en la costa), refacción a la que se procedió en parte con la cooperación

de la empresa privada, así como, por el otro, la aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial en el año de 1998. Los gobiernos municipales del Frente Amplio no persiguieron una estrategia económica propia (Raza 2000). Sin embargo, el gobierno local ha dejado entrever últimamente un interés por proyectos de envergadura cuya ejecución estuviera, eso sí, en manos de la empresa privada. Posiblemente, el proyecto más conocido sea el Plan Fénix, con el cual se pretende animar la zona portuaria mediante la instalación de complejos comerciales. No obstante el ambiente para iniciativas económicas de la intendencia ha sido muy negativa desde el fin de 1998 debido a la crisis económica que afectó de una manera muy grave a la economía local.

De manera que se observa un cambio en las prioridades de la política municipal del FA. Durante el primer período de gobierno, en el que el acento fue puesto en la periferia, posiblemente repercutieron todavía las manifestaciones de los nuevos movimientos sociales de los años ochenta. Pero éstos han ido perdiendo contundencia poco a poco. Paralelamente fue disminuyendo el peso de la izquierda más radical dentro del Frente, especialmente del Partido Comunista (PC). La crisis del PC tuvo también sus repercusiones negativas en los sindicatos, en los que los comunistas desempeñaban un papel importante. Más allá de ello, el potencial de electores dentro de la clase trabajadora tradicional y de la población marginada estaba bastante agotado, como subrayan Becker, Jäger y Raza (2001: cap. 4). Una expansión de la base de votantes era pensable con una orientación hacia la clase media. Para ésta resulta interesante la política municipal de Arana. Tal política también es compatible con el desarrollo del sector terciario y con la adopción de funciones administrativas centrales en el Mercosur. Eso sí, el Plan Fénix podría revelarse como autogol. En el marco de ese plan, el sistema de vías férreas debe ser recorrido un tanto del puerto. Pero, paralelamente, el ferrocarril podría adquirir inusitada importancia para la exportación de madera en los próximos años. De esta manera el proyecto restaría vitalidad al

puerto y ocasionaría problemas de transporte en el área de las exportaciones. La política municipal no ataca el meollo de la crisis de la economía local, pero sí aligera sus consecuencias.

El acercamiento a la clase media no solamente se reflejó en el resultado de las elecciones, sino también en la disposición participativa de círculos de clase media más bien lejanos al Frente Amplio. De tal suerte, en los últimos comicios incluso hombres de negocios presentaron sus candidaturas a consejos vecinales en el centro de la ciudad, zona donde la participación fue bastante alta. Esta concurrencia se repitió en las zonas marginales con mala infraestructura y con expectativas correspondientes puestas en la administración municipal. No obstante, en los tradicionales centros obreros del FA a lo largo de la bahía del puerto, solamente unos pocos asistieron a la votación. Acá resuena plenamente la crisis de la industria y, en vista de la infraestructura existente, tampoco se esperan mayores iniciativas urbanísticas de parte de la comuna (Brecha, 30 de octubre de 1998: 10).

Al Frente no le está resultando fácil empalmar con los distintos grupos sociales. Sin embargo, no sólo ha podido mantener su tradicional potencial de votantes, sino que lo ha expandido en dirección a la clase media. En las últimas elecciones nacionales logró avances substanciales en las proximidades de Montevideo, así como en los centros urbanos del Interior, como por ejemplo en Paysandú. Con un 40% de los votos emergió como el partido más fuerte; su candidato a la presidencia y anterior alcalde de Montevideo, Tabaré Vazquez, apenas perdió en la segunda vuelta contra la falange de los partidos “tradicionales”. Si bien el Frente todavía no logró asumir el gobierno en el plano nacional, logró establecer una minoría parlamentaria de bloqueo con relación a varios asuntos. Esta quizás también podría agrandar sus espacios en el perímetro de la política municipal.

Porto Alegre

Hasta bien entrado el siglo XVIII lo que conocemos hoy en día como Rio Grande do Sul con su capital Porto Alegre, fue parte de una región bastante homogénea en términos socioeconómicos y culturales, la Cuenca del Plata. Las partes españolas y portuguesas de esta cuenca comenzaron a orientarse hacia rumbos económicamente distintos a partir de la segunda mitad de ese siglo. A través de la producción de cuero, la parte española fue integrada progresivamente a los circuitos económicos del continente europeo en proceso de industrialización, mientras que la producción pecuaria del extremo sur del Brasil se concentró en el mercado interno de esa región, mercado que estaba marcado por el sistema de la esclavitud (Reichel/Gutfreind 1998: 14, Targa 1996a: 26). Esta constelación constituyó también el conjunto de circunstancias socioeconómicas dentro del cual se desarrollaron las guerras independentistas y los conflictos fronterizos del siglo XIX en la Cuenca del Plata.

La ubicación fronteriza fue política y socioeconómicamente determinante para Rio Grande do Sul. En esta región se encontraban importantes instalaciones militares, particularmente también en Porto Alegre. En determinadas situaciones, los militares sul-rio-grandenses desempeñaron un papel importante en el marco de conflictos sociopolíticos (Targa 1996a: 34ss). El asentamiento de pequeños campesinos de ascendencia europea durante el período imperial del Brasil, en especial de alemanes e italianos, estuvo relacionado también con la situación fronteriza. La idea provino de la emperatriz Dona Leopoldina, de origen austrohúngaro. El proyecto concordaba con la praxis de los Habsburgo en las regiones fronterizas con el imperio otomano. El asentamiento de pequeños campesinos no sólo perseguía el propósito de asegurar militarmente la frontera por el sur así como frenar el potencial separatismo de los grandes terratenientes, sino también el de crear un contrapeso político frente al latifundismo (Targa 1996a: 28ss). Esto último no habría

de resultar a nivel nacional, pero sí en Rio Grande do Sul como única región en el Brasil (Targa 1996b: 91).

La región de los pequeños colonizadores se encuentra en el *hinterland* montañoso al norte de Porto Alegre, que desde la mitad del siglo XIX se constituyó en el centro comercial para la pequeña agricultura. La paulatina comercialización de esta producción agrícola posibilitó una acumulación substancial en manos de los comerciantes (Ceipek 1998: 29ss). Tanto la ciudad como las demandas de infraestructura urbana empezaron a crecer. Porto Alegre fue dotado de un mercado central (1842), un sistema de suministro de agua (1861), un tranvía (1864), un alumbrado público (1870), teléfonos (1884), y de diversos establecimientos culturales. La iniciativa municipal fue decisiva en este contexto, pero los servicios y su financiamiento fueron manejados muchas veces por capital extranjero (Macedo 1993, Almeida 1996a: 101). La región en torno a Porto Alegre se recuperó económicamente frente a la zona austral de ese Estado federal, caracterizado por la cría de ganado y por su producción de charqui. Los métodos de producción en el sur eran particularmente arcaicos. La producción de carne salada estaba a cargo de esclavos y sus principales áreas de mercado se hallaban en el Brasil (Ceipek 1998: 25ss).

Las divergentes estructuras de producción del Estado federal se reflejaron en bloques de poder antagónicos (Pesavento 1997: 53). Al frente de los grandes ganaderos se colocó un bloque compuesto por la clase media urbana y ganaderos disidentes, así como por comerciantes y productores, los que estaban íntimamente ligados a la pequeña agricultura (Pesavento 1997: 66, Targa 1996b: 91). Este bloque se organizó en el PRR. Buscaba una forma diferente de Estado regional, capaz de establecer un equilibrio de intereses a nivel social y de fomentar la diversificación económica. Pretendía “establecer una armonía entre el progreso económico y la conservación del orden social” (Pesavento 1997: 67, Targa 1996b). Esta visión se apoyaba en el positivismo de Auguste Comte. Los conflictos se agudizaron hacia el final de la era de la esclavitud (1888, en Rio Grande do

Sul ésta advino ya en 1884) y de la monarquía (1889). Contando con la simpatía de los militares apostados en la región, el PRR se impuso en una sangrienta guerra civil librada entre 1893 y 1895.

El partido instaló una “dictadura positivista” que perduró por más de tres décadas. El poder estuvo pronunciadamente concentrado en manos de los gobernadores, careciendo de influencia el parlamento regional. Paralelamente el PRR interpretaba al Estado como instancia consagrada al bienestar común. Este compromiso fue llevado a la práctica mediante una política fiscal relativamente progresiva, la ampliación de infraestructura en alianza con el capital extranjero, el fomento de la pequeña agricultura, el fomento indirecto de la manufactura, así como a través de intentos de conciliación entre el capital y el trabajo (Targa 1996b, Pesavento 1993, Ceipek 1998: 70ss). Este tipo de política fue singular en el Brasil socioeconómicamente heterogéneo y políticamente descentralizado de la “República Velha” (1889-1930).

Por el contrario, existieron algunas paralelas entre el proyecto de Estado de Batlle en el Uruguay y aquél del PRR en Rio Grande do Sul. En ambos se trataba de una “modernización conservadora” (Targa 1996b: 92) y ambos estaban consagrados al establecimiento de un equilibrio social. No obstante, la variante *gaúcha* se caracterizó por unos rasgos incomparablemente más autoritarios, lo que posiblemente esté relacionado con su orientación en contra de la gran ganadería. A diferencia de los Colorados de cuño muy urbano en el Uruguay, el PRR tenía una sólida base rural conformada por los pequeños colonizadores agrícolas. Para Targa (1996b: 91) “la diversificación agraria era el fermento que nutría la existencia de los positivistas y permitía la realización de su obra”.

La existencia de los pequeños colonos agrícolas representó el punto de partida de un desarrollo incomparablemente más diferenciado en el noreste de Rio Grande do Sul que en el sur de ese Estado federal, distinguido por la ganadería, y que en el Uruguay. La agricultura diversificada se constituyó en una fuente de acumulación y en un

área de mercado para un temprano desarrollo industrial. Debido a ello la industria, particularmente en el noreste del Estado y con gravitación en Porto Alegre –pero con características ciertamente policéntricas–, vivió un auge a partir de la última década del siglo XIX. Ella también se distinguió por la presencia de la pequeña y mediana empresa y estuvo orientada hacia el mercado local. Potencialmente, sin embargo, también era pensable la comercialización en otros mercados regionales del Brasil (Reichel 1993, especialmente 262ss, Bandeira 1994: 23ss, Almeida 1996a y b, Ceipek 1998: 49ss). Porto Alegre era además el centro financiero de Rio Grande do Sul y una plaza comercial de importancia. El auge económico de la ciudad estuvo acompañado de una ampliación y parcial municipalización de la infraestructura, así como de un pronto levantamiento de una universidad federal (Almeida 1996a: 101).

El modelo económico orientado hacia la exportación, al cual Rio Grande do Sul estaba integrado como proveedor de bienes agrícolas baratos, entró en crisis con la depresión mundial de los años treinta. Se generó un fuerte conflicto político en torno a la salida de la crisis, en el marco del cual se impuso en 1930 una alianza heterogénea entre los Estados federales más bien periféricos bajo el liderazgo del ex gobernador de Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, en contra de los barones del café paulistas y de los industriales. Pero la alianza tan sólo logró imponerse de forma parcial. En los hechos se aliaron en un pacto de orden nacional la oligarquía agraria y la burguesía industrial, a la que la clase media y los trabajadores industriales fueron integrados en una posición subordinada (Novy/Fernandes 1999: 166ss). Con una política de “modernización conservadora” el nuevo bloque buscó, por un lado, superar la crisis de la balanza de pagos y de encontrarle nuevas opciones a la acumulación industrial así como, por el otro, mantener a raya a los sectores sociales más empobrecidos. Este proyecto político fue susceptible de crisis tanto por el lado económico como político. Situaciones críticas eran resistidas por el bloque dominante mediante una centralización del poder y a través métodos represivos (Fiori

1995). Entre otras cosas, esto repercutió en una – periódicamente– masiva coartación de las administraciones autónomas federales y municipales.

La industrialización del Brasil tomó impulso después de 1930, concentrándose, empero, de manera pronunciada en São Paulo. Acá las fuentes de la acumulación eran más abundantes, el mercado de consumo más grande y la base industrial existente más desarrollada (Cano 1998: cap. 5, Almeida 1996b). Por su lado, la evolución industrial de Rio Grande do Sul permaneció distinguiéndose por bienes no duraderos de consumo, especialmente de origen agrario. Las pequeñas y medianas empresas mantuvieron su relevancia, regionalmente la estructura industrial fue de carácter más bien policéntrico, permaneciendo Porto Alegre como importante centro industrial. Hasta la década de 1950 los bienes industriales fueron comercializados sobre todo en el propio estado de Rio Grande do Sul porque la infraestructura insuficiente no permitió la formación de un verdadero mercado nacional (Carrion Jr. 1993: 418ss, Targa et al. 1998: 267s, con connotaciones parcialmente diferentes Müller 1993: 364ss).

De forma similar al caso uruguayo, el modelo económico tradicional de Rio Grande do Sul llegó a sus límites en los años cincuenta. La economía pecuaria se hallaba estancada, la pequeña agricultura soportaba la progresiva parcelación de la tierra, las posibilidades de una expansión industrial se habían agotado en sus formas tradicionales, y las inversiones se canalizaron de forma creciente al sector de bienes raíces (Müller 1993: 388). No obstante, el proceso de industrialización en São Paulo sí le ofrecía posibilidades de expansión económica a Rio Grande do Sul, posibilidades que no poseía el Uruguay con su restringida política de sustitución de importaciones en el marco de una economía pequeña. En efecto, los distintos gobiernos federales de Rio Grande do Sul buscaron la salida de la crisis en una industrialización forzada, en parte a través de una acomodación pasiva a la política nacional y en parte confiriéndole un acento propio. Esta última fórmula era

defendida especialmente por el ala izquierda –de tendencia reformista– del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), organizada en torno a Leonel Brizola, quien gozaba de apoyo especialmente en los centros urbanos (Müller 1993: 370ss, Pesavento 1997: 126ss). Estas tentativas reformistas en la periferia fueron terminadas por el golpe de Estado de 1964. Los gobiernos militares prosiguieron con el proyecto conservador de industrialización. En una primera fase intensificaron la tendencia hacia una producción de bienes de consumo duraderos, la que se observaba ya desde fines de la década de 1950. En una segunda fase forzaron también el levantamiento de una industria de bienes de capital.

Rio Grande do Sul se integró a este modificado modelo nacional de industrialización particularmente a través de la producción acrecentada de bienes intermedios para la industria paulista, pero también la producción de bienes de consumo duraderos y de algunos bienes de capital aumentó de manera significativa (Carrion Jr. 1993: 420, Ceipek 1998: 90ss). En los años sesenta, la tasa real anual de crecimiento fue de un 6,2% y en la década siguiente incluso llegó a un 10,6% (Accurso 1993: 65, Cuadro 1). Un particular dinamismo acusó el crecimiento industrial en los años setenta, cuando fue alcanzada la marca del 14,7% (ibídem: 66, Cuadro 2). Esta actividad contrasta de manera notoria con el relativo estancamiento del Uruguay en aquel período. La incorporación a un mercado nacional de proporciones y en vías de desarrollo así como la más pronunciada diversificación del sector agrícola, probablemente constituyan las explicaciones del divergente camino de crecimiento.

Pero el comienzo de los años ochenta representó el inicio de una etapa nueva también para Rio Grande do Sul. En ese decenio, y como consecuencia de la crisis de endeudamiento brasileña, los gobiernos centrales desecaron el mercado interno, lo que se tradujo en un estancamiento económico y en una orientación hacia las exportaciones de la economía sul-riograndense, especialmente también de la industria. En términos

territoriales, esta fase de industrialización se caracterizó por una “desconcentración concentrada” (Bandeira 1995: 232). Entre 1959 y fines de los años ochenta, la participación de la propia ciudad de Porto Alegre en la producción industrial de ese Estado federal disminuyó de una cuarta a una décima parte. Paralelamente, entre 1959 y 1988, subió la participación del noreste *gaúcho* (cuyo centro es Porto Alegre) en dicha producción, de un 55 a un 72% (Bandeira 1995: 232). Así, Porto Alegre se convirtió progresivamente en un centro de servicios para una extensa región industrial. Con unas marcas que oscilaron entre el 22 y el 25% entre 1959 y 1980, su contribución al producto interno bruto de Rio Grande do Sul se mantuvo bastante constante (Alonso 1994: 80, Cuadro 6).

La crisis económica de los años ochenta agravó la crisis política del régimen militar. La resistencia en contra de la dictadura fue aumentando. Fue justamente la región sureña del país, y en especial Porto Alegre, la que se constituyó en uno de los centros del movimiento en contra de los militares. Ella logró imponer la paulatina redemocratización de las estructuras municipales, federales y centrales a partir de los inicios de la década de 1980; no sólo demandaba un proceso de democratización, sino además uno de descentralización. Esta fue efectivamente incluida en la constitución de 1988, la que preveía en particular el fortalecimiento del potencial financiero de los municipios y de los Estados federales.

En el marco de la tendencia hacia un desarrollo económico cada vez más heterogéneo, la descentralización resultó interesante tanto para la derecha como para la izquierda. La descentralización otorgó a los partidos de derecha y a la izquierda populista con sus marcadas estrategias clientelistas los medios como para afirmar sus bastiones regionales. Por otro lado, le pudo abrir perspectivas a la nueva izquierda para el desarrollo de proyectos alternativos locales y regionales, en particular al PT, que había emergido de los movimientos sociales. Donde más señaladamente se aprovechó esta oportunidad fue en Porto Alegre y en Rio Grande do Sul. Al

respecto, el PT pudo recurrir al legado del Estado positivista y de las corrientes de izquierda de fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta.

Por de pronto, sin embargo, pareció como si en Porto Alegre el Partido Democrático Trabalhista (PDT) pudiera empalmar con la herencia izquierdista de los años cincuenta y de principios de la década de 1960. A nivel nacional, el PDT fue conducido por el destacado político *gaúcho* Leonel Brizola, un ex gobernador sul-rio-grandense del PTB; el PDT logró ligar con la tradición del PTB en el extremo sur del Brasil. Los fuertes movimientos barriales de Porto Alegre, unificados desde principios de los años ochenta en un organismo central, apoyaron al candidato del PDT en la primera elección municipal libre en 1985 con la esperanza de una mejora de las condiciones de vida. Para crear un marco participativo de carácter obligatorio al respecto, demandaron una democratización de la política municipal. El alcalde del PDT se mostró abierto a la exigencia, pero en los hechos no hizo nada en tal sentido. Más bien persiguió una política clientelista de corte populista (de izquierda) y dejó tras sí una administración municipal estropeada y una infraestructura desgastada. A raíz de ello, en 1988 los movimientos barriales –dentro de los cuales el PT había ganado sucesivamente en influencia– decidieron apoyar al candidato del PT, Olívio Dutra (Abers 1996: 6s, Navarro 1997: 185ss, Fedozzi 2000: cap. 1).

Con la victoria electoral, el gobierno municipal del PT hizo del “presupuesto participativo” el núcleo de su proyecto comunal de Estado. Pero el comienzo resultó difícil. Las cuentas municipales se hallaban inmersas en un caos, el 98% de los ingresos estaban destinados a gastos de personal (Campello 1994: 71). Es por ello, que se presentaba escaso el margen de maniobra relativo a la determinación de inversiones locales y a una correspondiente participación ciudadana. Por lo tanto, los primeros pasos no daban muchos resultados concretos. Los movimientos sociales que habían inscrito una democratización del presupuesto municipal en su lista de prioridades ya antes de

la elección de Olívio Dutra sintieron un desencanto y aumentaron sus presiones (Fedozzi 2000: cap. 2, ONG Solidariedade 2003: 41ss.). No obstante, a través de una reorganización administrativa y de una reforma salarial (Campello 1994), así como de una reforma tributaria destinada a elevar los ingresos (Cassel/Verle 1994, Augustin Filho 1997), el gobierno del PT logró desde 1990/91 generar nuevos espacios de operación e institucionalizar simultáneamente una elaboración participativa del presupuesto en el campo de la inversión municipal (Augustin Filho 1994, Navarro 1997, Abers 2000, Fedozzi 2000: cap. 3).

Para hacer manejable el proceso de elaboración participativa del presupuesto en una ciudad de 1,3 millones de habitantes, Porto Alegre fue dividida en dieciséis regiones. En cada una de las regiones el ciclo presupuestario comenzó con asambleas en las cuales la administración municipal da cuenta de la ejecución del último plan de inversiones. En esas asambleas estaba presentado también el proceso de confección del próximo ejercicio financiero. Estas reuniones se caracterizaron por un carácter más bien activador. En las semanas siguientes, y en el marco de reuniones a nivel vecinal, se establecieron las prioridades de inversión locales. A partir de las propuestas vecinales, los dieciséis foros regionales electos elaboraron un programa regional común de inversiones que es negociado con la administración municipal. Ellos controlaron además la realización misma de los proyectos. En la toma de decisiones a nivel del conjunto de la ciudad son consideradas tanto las preferencias de los afectados como criterios socioeconómicos (falta de infraestructura, índice de pobreza de la región, participación porcentual de la población regional en la población total). Este diseño ha sido sujeto a varias reformulaciones, últimamente se ha sido reducido el número de reuniones (Abers 2000, Fedozzi 2002: 164ss., ONG Solidariedade 2003: 28ss.)

Ahora bien, también existen decisiones de inversión que atañen a mucho más que una sola región urbana. Para integrar inclusive estas decisiones al proceso presupuestario participativo e involucrar asimismo, más allá de las juntas vecinales, a

sindicatos, asociaciones de profesionales, confederaciones empresariales y diversas organizaciones no gubernamentales, el gobierno municipal creó en 1994 cinco foros temáticos para las siguientes áreas de interés común: educación, salud y servicios sociales, transportes, organización y desarrollo municipal, y desarrollo económico.

De cada región y de cada foro temático se eligen dos delegados al Conselho do Orçamento Participativo. Este tiene la tarea de negociar la distribución de las inversiones entre las regiones y sobre las inversiones generales y determina las reglas de funcionamiento del proceso de participación presupuestaria (Gret/Sintomer 2003: 51 ss.).

El empeño valió la pena para los participantes. Las prioridades de inversión han cambiado. Analizando los planes de inversión 1992-2000, se desprende que “(e)xiste una asociación negativa entre la renta de la región y el volumen de inversión per capita. (...) Se puede concluir que el PP funcionó como un poderoso instrumento de distribución de renta, las regiones más pobres recibieron mayor volumen de inversiones por habitante” (Marchetti 2002: 197). Los grandes proyectos de prestigio han cedido lugar frente a los pequeños destinados a la periferia. Así, fueron asfaltadas un sinnúmero de calles en las favelas, permitiendo el acceso en condiciones de lluvia a buses y demás vehículos que antes se quedaban atascados en el fango. De esta manera se logró una mucho mejor integración de más de un barrio a la ciudad. Con el tiempo los barrios de clase media también se beneficiaron con la nueva política de inversión municipal.

Gracias a la crecida aceptación con respecto a los gastos locales y al fortalecimiento de la capacidad fiscal comunal por medio de la nueva constitución federal del año 1988, el gobierno municipal del PT pudo expandir la base financiera de la comuna. Esto le permitió mantener la participación de las inversiones dentro del conjunto de los gastos municipales de forma bastante estable en alrededor de un 17% durante el primer mandato del gobierno municipal del PT (Augustin Filho 1994: 58, Cuadro 1).

Debido a la crisis y al ahucamiento de las finanzas municipales por las políticas federales, se han reducidos los espacios para la inversión en los últimos años. En 2002, las inversiones representaron menos que 15% de los gastos. Incluso con la reducción relativa de las inversiones, “(e)m 2003, a matriz orçamentaria aprestantado ao COP, pela primeira vez desde a criação do OP, mostrou um resultado deficitário em mais de 82 milhões de reais” (ONG Solidariedade 2003: 120). Es decir, el OP llega a cierto límites fiscales.

En un encuentro del Mercosur celebrado en Montevideo en marzo de 1999, el alcalde de entonces de Porto Alegre, Raul Pont, se pronunció tajantemente en contra de una competencia consistente en la reducción de presiones fiscales con el fin de atraer empresas, competencia que debilitaría el potencial financiero. Presumiblemente, sin embargo, el poder de negociación del gobierno municipal frente a inversionistas es más fuerte que aquél que pueden ostentar otras ciudades dado que a) la administración local es considerada como sumamente capaz, b) la criminalidad acusa índices relativamente bajos con relación a otras partes del Brasil, y c) la ciudad se halla ubicada favorablemente dentro del Mercosur en términos geográficos (Alonso 1997: 75s). Finalmente, la política municipal nos parece especialmente compatible con las exigencias del capital proveniente del sector terciario (para el asentamiento de empresas véase www.zh.com.br, 6.12.1999). En efecto, en los últimos años la ciudad se ha ido constituyendo señaladamente en un centro de servicios, la participación de éstos en la renta interna local había ascendido a un 68,8% en 1997, mientras que aquélla de la industria tan sólo representaba un 29,4% (Porto Alegre-Prefeitura s/f : 32, cuadro 2).

A manera de ejemplo, cabe referir que el gobierno municipal aprovechó su margen de negociación para estipular como contraprestación por la autorización de un enorme centro comercial de la red comercial francesa Carrefour, contribuciones concretas para el respectivo barrio y una participación de 10% para personas con más de 30 años en la planta de empleados de

dicho centro (Pinheiro s/f). La comuna también ha puesto ciertos acentos en el fomento de pequeñas y medianas empresas, así como en la política tecnológica (Alonso 1997). Aun así, la crisis brasileña de los años noventa ha afectado duramente a Porto Alegre, si bien no tanto como a su *hinterland* industrial. El desempleo estadístico en el gran Porto Alegre subió de un mínimo del 10,2% en el año de 1995 (Zaions/Costa 1998: 243, Cuadro 2) a un 19,6% en septiembre de 1999 (Governo do Estado do Rio Grande do Sul 1999: 10) y denota tasas entre 14,2% e 17,8% en 2002 e 2003 (Informe PED 2003: 7, cuadro 1), siendo especialmente alto en los barrios marginales. Este demuestra los límites de una política económica municipal activa.

El PT ha podido consolidar su posición dentro de los sectores más empobrecidos a pesar del apreciable desempleo e incluso ha podido sumar puntos en los barrios pudientes a través de un mejoramiento de la infraestructura y del buen funcionamiento de la administración municipal (Abers 2000). La participación en el OP creció desde 1.300 personas en el año 1989 hasta un pico de 20.724 en el año 1999, pues sufrió de un descenso ligero (Texto GT 2002: 15, gráf. 1). La socióloga estadounidense Rebecca Abers resume de la siguiente manera una investigación realizada por ella: “Mientras la mayoría de los participantes representan por lo general a los segmentos pobres de la población, normalmente no se encuentran entre los más empobrecidos. Esto significa que tienen salarios bajos, pero que disponen de ingresos más o menos regulares y de viviendas relativamente estables” (Abers 1996: 18, CIDADE 1999: Parte I, con datos más actuales). La participación de mujeres es más fuerte que en otras instancias municipales aunque tienen participan más las reuniones que en los instancias electas del OP (Abers 2000: 128). La participación directa de los sectores más acomodados en el Orçamento Participativo se ha ido intensificando en el transcurso de la década de 1990 aunque sigue siendo relativamente baja (De Olho no Orçamento 1999: 2).

El Orçamento Participativo reestructuró el estado municipal en favor de las clases populares. Desde su segundo mandato, el gobierno municipal del PT buscó involucrar también la clase media en una manera más sostenida en políticas participativas y reforzar el perfil internacional de la ciudad. Con este meta, el gobierno del alcalde Tarso Genro lanzó el proyecto de la Cidade Constituinte y una reforma de la planificación urbana. O exemplo de Barcelona que sirvió em muitas cidades de América Latina como modelo en reformulación de los planos estratégicos y del “city marketing” (Arantes et al. 2000) fue un ponto de referencia muy importante como se puede desprender de los documentos de discusión de la época (Prefeitura Municipal de Porto Alegre 1993). Comparte con el enfoque de Barcelona la énfasis de la competitividad de la ciudad, la articulación entre los sectores públicos y privados, la crítica del modelo burocrático fordista de planificación urbana y la exigencia de introducir un modelo más flexible. A la vez, se optó para un modelo más participativo que permitió un involucramiento tantos de grupos corporativos de los sectores ligado al desarrollo inmobiliario como de ONGs ligados a los sectores populares. El Plano Diretor surgió como compromiso de estos dos vertientes. De un lado, el sector inmobiliario logró – con el apoyo de ediles opositores – una mayor flexibilidad en la planificación y la posibilidad de disfrutar de una manera más intensivo de la renta de la tierra de que fue originalmente provisto. De otro lado, se abrió el camino hacia un uso y acceso más equitativo y democrático a la tierra (Prefeitura Municipal de Porto Alegre – SPM 2000, Silva 2000: 160, Fedozzi 2000: 183ss). Además, se institucionalizó una democratización de los procesos de planificación y su articulación con el OP. La de participación es complementado por más de 30 consejos sectoriales (cf. Burmeister 2000, Fedozzi 2002: 164ss).

El PT ha logrado resquebrajar profundamente la cultura política del clientelismo a través de la figura del presupuesto participativo. “En vez de peregrinar como solicitantes al gobierno municipal, ahora la gente asiste a las asambleas del

presupuesto participativo”, constata Paula Xavier, funcionaria de la administración municipal (citado conforme a Becker 1996: 26). Paralelamente ha cambiado también la relación entre los movimientos sociales y el gobierno y la administración municipales. El conflicto ha sido substituido por el diálogo. Los movimientos sociales han sido progresivamente integrados al Estado local (Texto GT 2002: 18ss). No obstante, se han registrado últimamente unas señas de un cierto “cansancio” cuantitativo” (Fedozzi 2002: 166). Esta se expresa en un ligero retroceso en la participación en las reuniones del OP y en el retroceso del grado de organización de los participantes en el OP. Cuando en el año 1995 75,9% de los participantes en las plenarios del OP fueron vinculados a organizaciones sociales, este porcentaje se redujo a 60,9% hasta 2000 (Baierle 2002: 142). Este perdida de ímpetus se puede atribuir de un lado a los conquistas materiales ya logrados, de otro lado al elevado grado de complejidad del sistema participativo (cf. Verle/Brunet 2002, ONG Solidariedade 2003). Por lo tanto se introdujeron unas medidas de simplificación lo que testifica que se lograron mantener capacidad autocrítica y flexibilidad organizador.

A través de las reformas municipales el Estado local ha ganado en cuanto a compactibilidad. El potencial riesgo de ruptura yace en el propio PT, concretamente en la competencia entre distintas corrientes al interior del partido, las que también buscan aliados dentro de los movimientos sociales. Pese a ello, hasta ahora el PT ha podido mantener un equilibrio entre estas tendencias en Porto Alegre.

La gestión participativa de los municipios fue concebido por estrategias del PT como pasos hacia construir mayorías incluso a otros niveles territoriales (Pont 1999: 38). En 1998 y por vez primera, un candidato de ese partido fue elegido para el cargo de gobernador de Rio Grande do Sul. Se trató de Olívio Dutra, el primer alcalde de Porto Alegre del PT. Dutra buscó transmitir elementos básicos de la exitosa política local al plano del Estado regional. Se construyó un “presupuesto participativo” a nivel de Rio Grande do Sul que cuestionaba los poderes

clientelistas tradicionales. El OP estadual fue complementado por una política económica que daba prioridad a las pequeñas y medianas empresas (Leubolt 2003). Por lo tanto, se daba un paso hacia la consolidación de un modelo alternativo estadual. No obstante, el PT no logró la reelección de un candidato PT para el cargo de gobernador del estado en el año 2002. En contraste con el resultado en Rio Grande do Sul, el candidato del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó las elecciones presidenciales. Su gobierno no optó para la democracia participativa, sino para un modelo neo-corporatista que implica una concertación de las lideranzas de los grandes grupos de interés.

El proyecto del PT de Porto Alegre representa de un lado una continuidad del modelo de desarrollo positivista del penúltimo cambio de siglo, de otro lado introduce la novedad de la participación democrática con instancias deliberativas. Por sus condiciones históricas específicas, sin embargo, las experiencias de Rio Grande do Sul no son fácilmente trasplantables a otras regiones en América Latina.

Dos variantes de una política municipal de izquierda: paralelas y matices

La particularidad de Uruguay y Rio Grande do Sul reside en la política de “modernización conservadora” que busca el equilibrio social y que –en el contexto regional– generó una distribución del ingreso menos polarizada y modernizó el perfil del Estado. En el Uruguay, esta ruta de desarrollo encontró su base social en Montevideo, en Rio Grande do Sul en la pequeña agricultura y de grupos de presión urbanos. El impulso principal para el desarrollo de Montevideo provino de su condición de emporio regional. Pero la base productiva de ese emporio era limitada. En términos espaciales y en una primera instancia, la importancia económica de Porto Alegre fue bastante más restringida. No obstante, el entorno económico desarrolló una diversidad más pronunciada que estuvo relacionada, y no por

último, con la pequeña agricultura. El crecimiento industrial de Porto Alegre y de sus inmediaciones recibió impulsos a través de su integración al mercado nacional brasileño, los cuales no se registraron en el caso de la industria de Montevideo dadas las limitaciones derivadas de las reducidas proporciones del país. De ahí que Porto Alegre pueda hacer prevalecer una base económica más desarrollada también dentro del Mercosur. Esto además tiene consecuencias para la política local en lo que concierne a su base tributaria. En Porto Alegre ésta base es más amplia en la medida en que la constitución financiera del Brasil otorga márgenes más holgados a las comunas que la uruguaya.

En ambos casos el punto de partida para una política municipal progresiva fue una reforma del Estado local, así como un mejoramiento de la infraestructura urbana. En Porto Alegre la reforma fue más radical en tanto que democratizó el capítulo principal del presupuesto. En ambos casos también, fueron primera y especialmente las zonas periféricas las que se beneficiaron con la ampliación de la infraestructura, pero luego también la clase media. Los partidos de izquierda desarrollaron una fuerza vinculante hasta bien adentro de las clases media urbanas. En lo fundamental, los proyectos municipales son compatibles con el desarrollo de un sector terciario vigoroso, si bien en Montevideo ciertamente existen contradicciones en el detalle. A los gobiernos locales les resulta mucho más dificultoso lidiar con la crisis del sector productivo y sus consecuencias sociales, como ser el desempleo de los trabajadores industriales. Presumiblemente estos problemas solamente podrán ser resueltos de forma limitada en el plano exclusivamente local. Por esta razón, tanto el Frente Amplio en el Uruguay como el Partido dos Trabalhadores en Rio Grande do Sul se han concentrado en la ascensión al poder a nivel nacional y regional, respectivamente. Aun haciendo una política municipal muy inteligente, unas pequeñas islas urbanas de felicidad la tienen muy difícil en un océano que les es hostil (Heeg/Brenner 1999).

Literatura

Abers, R. (1996): Learning Democratic Practice: Distributing Government Resources through Popular Participation in Porto Alegre, Brazil. (Mimeo)

Abers, R.N. (2000): Inventing Local Democracy. Grassroots Politics in Brazil. Boulder/Londres.

Accurso, C.F. (1993): Relações macroeconômicas da economia gaúcha (1960-1985). En: Indicadores Econômicos FEE, 21(3), p. 63-94.

Almeida, P.F.C. (1996a): A gestação das condições materiais da implantação da indústria gaúcha. En: Targa, L.R.P. (ed.): Gaúchos & Paulistas. Dez escritos de história regional comparada. Porto Alegre, p. 93-116.

Almeida, P.F.C. (1996b): As razões materiais da posição periférica da indústria gaúcha na industrialização restringida brasileira. En: Targa, p. 117-140.

Alonso, J.A.F. (1994): Análise do crescimento da Região Sul nas últimas décadas – 1959-1990. En: Alonso, J.A.F. et al.: Crescimento econômico da Região Sul do Rio Grande do Sul. Causas e perspectivas. Porto Alegre, p. 49-94.

Alonso, J.A.F. (1997): A inserção de Porto Alegre na nova ordem internacional e o enfrentamento do problema social local. En: Genro, T. (ed.): Porto da cidadania. Porto Alegre, p. 51-82.

Altmark et al. (1998): La localización industrial en Montevideo. Trabajo monográfico. Montevideo (mimeo).

Anachini, J.J. (1969): El sector industrial. Nuestra Tierra 21, Montevideo.

Arantes, O. et al. (2000, 2a. ed.): A cidade do pensamento único. Desmanchando consensos. Petrópolis.

Astori, D. (1996): La política económica de la dictadura. En: Astori, D. et al.: El Uruguay de la dictadura (1973-1985). Montevideo.

Augustin Filho, A. (1994): A experiência do Orçamento Participativo na Administração Popular da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. En: Horn, C.A. (ed.): Porto Alegre: o desafio da mudança. Porto Alegre, p. 49-68.

Augustin Filho, A. (1997): Finanzas públicas. En: Genro, S. 91-100.

Baierle, S. (2002): PP al termidor? En: Verle, J./Brunet, L. (org.): Construyendo un nuevo mundo. Evaluación de la experiencia del Presupuesto Participativo en Porto Alegre – Brasil. Porto Alegre, p. 128-152.

Bandeira, P.S. (1994): As raízes históricas do declínio da Região Sul. En: Alonso et al., p. 7-48.

Bandeira, P.S. (1995): A economia da Região Sul. En: Affonso, R.B.A./Silva, P.L.B. (ed.): Desigualdades regionais e desenvolvimento. São Paulo, p. 225-251.

Becker, J. (1996): PT-Erfolge durch Partizipation. [Exitos del PT vía participación]. En: *ila*, nro. 201, p. 25s.

Becker, J./Novy, A. (1999a): Divergence and Convergence of National and Local Regulation: the Case of Austria and Vienna. En: *European Urban and Regional Studies*, 6(2), p. 127-143.

Becker, J./Novy, A. (1999b): Chancen und Grenzen einer alternativen Kommunalpolitik in Wien. Ein historischer Überblick. [Oportunidades y límites de una política municipal alternativa en Viena. Un resumen histórico]. En: *Kurswechsel*, 2, p. 5-16.

Becker, J./Jäger, J./Raza, W. (2001): Economía Política de Montevideo. Desarrollo urbano y política local. Montevideo.

Bértola, L. (1991): La industria manufacturera uruguaya 1913-1961: un enfoque sectorial de crecimiento, fluctuaciones y crisis. Montevideo.

Burmeister, N. (2000): A cidade, a sua gestão e seu planejamento. En: Pont, R. (coord.): Porto Alegre: uma cidade que conquista. A terceira gestão do PT no governo municipal. Porto Alegre, p. 77-84.

Caetano, G./Rilla, J. (1996): La era militar. En: Astori et al., p. 37-72.

Calloia, F. et al. (1984): La deuda externa y la crisis uruguaya. Montevideo.

Campello, T.H.G.B. (1994): A política salarial dos servidores públicos de Porto Alegre no Governo Olívio Dutra. En: Horn, p. 69-82.

Cancela, W./Melgar, A. (1985): El desarrollo frustrado. 30 años de la economía uruguaya, 1955-1985. Montevideo.

Cano, W. (1998, 2ª ed. aum.): Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil, 1930-1995. Campinas.

Capandeguy, D./Crocco, C. (1994): Tipología de soluciones habitacionales. En: Instituto de Arquitectura y Urbanismo (ed.): Montevideo: una aproximación. Montevideo, p. 142-174.

Carrion Jr., F.M. (1993, 2ª ed.): A economia do Rio Grande do Sul – Evolução recente. En: Dacanal, J.H./Gonzaga, S. (ed.): RS: Economia & Política. Porto Alegre, p. 403-424.

Cassel, G./Verle, J. (1994): A política tributária e de saneamento financeiro da Administração Popular. En: Horn, p. 27-48.

Caumont, J.C. (1998): El sistema financiero uruguayo. Sus perspectivas. Montevideo.

Ceipek, S. (1998): Regionale Regulation in Rio Grande do Sul. Wien (WU-Wien, tesis de maestría no publicada).

CIDADE – Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (1999): Quem é o público do Orçamento Participativo: seu perfil, por que participa e o que pensa do processo. Porto Alegre.

Cocci, A.M. et al. (1980): La urbanización en Uruguay en la época de la inmigración europea. En: *Industrialisation des pays de la Plata. Eweils et somnolences*. Paris, p. 3-31.

Convenio UTE-Universidad de la República (s.f.): Serie de datos para Montevideo.

Costa Bonino, L. (1988): Crisis de los partidos tradicionales y movimiento revolucionario en el Uruguay. Montevideo.

Dressler, K. (1978): Uruguay. En: Bennholdt-Thomsen, V. et al. (ed.): *Lateinamerika. Analysen und Berichte 2*. Berlín.

Equipo 23 (1995): De generaciones. Lo que nos separa o nos une no es sólo el tiempo. Montevideo.

Fedozzi, L. (2000): O poder da aldeia. Gênese e história do Orçamento Participativo de Porto Alegre.

Fedozzi, L. (2002): La invención permanente de la democracia. En: Verle, J./Brunet, L. (org.): *Construyendo un nuevo mundo. Evaluación de la experiencia del Presupuesto Participativo en Porto Alegre – Brasil*. Porto Alegre, p. 153-181.

Filgueira, C./Filgueira, F. (1994): El largo adiós al país modelo. Políticas sociales y pobreza en Uruguay. Montevideo.

Finch, H. (1993): Utopia in Uruguay Redefined: Social Welfare Policy After 1940. En: Abel, C./Lewis, C.M. (ed.): *Welfare, Poverty and Development in Latin America*. London.

Fiori, J.L. (1995): O vôo da coruja. Uma leitura não-liberal da crise do estado desenvolvimentista. Rio de Janeiro.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul (1999): *Prestação de Contas do Governo do RS/1999*. Porto Alegre.

Gret, M./Sintomer, Y. (2003): Porto Alegre. La esperanza de otra democracia. Barcelona.

Heeg, S./Brenner, N. (1999): Lokale Politik und Stadtentwicklung nach dem Fordismus: Möglichkeiten und Beschränkungen. [Política local y desarrollo urbano después del fordismo. Posibilidades y limitaciones]. En: Kurswechsel, nro. 2, p. 103-119.

Informe PED (2003), Ano 12, No. 11 (www.fee.tche.br)

Jacob, R. (1981): Depresión ganadera y desarrollo fabril. Montevideo.

Jacob, R. (1983): El Uruguay de Terra 1931-1938. Montevideo.

Jacob, R. (1988): Modelo batllista. Variación sobre un viejo tema? Montevideo.

Jacob, R. (1996): Más allá de Montevideo: los caminos del dinero. Montevideo.

Kroch, E. (1998): Wohnen in Montevideo. En: *ila*, 217, p. 8-11.

Leubolt, B. (2003): Demokratisierung als Alternative zum neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Das Partizipative Budget im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. En: *Journal für Entwicklungspolitik*, 19(3), p. 69-86

Lopez Gallero, A. 1993): Uruguai: espaço financeiro internacional. En: Scarlato, F.C. et al. (ed.): *O nova mapa do mundo. Globalização e espaço latino-americano*. São Paulo, p. 167-177.

Macadar, L. (1992): Restauración democrática y política económica. Uruguay 1985-1989. Montevideo.

Macedo, F.R. (1993): História de Porto Alegre. Porto Alegre.

Mariano, C.N. (1998): Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur. Buenos Aires.

Marchetti, A. (2002): Democracia, equidad y eficiencia: el caso del presupuesto participativo en Porto Alegre. En: Verle, J./Brunet (orgs.): *Construyendo un nuevo mundo. Evaluación de la experiencia del*

Presupuesto Participativo en Porto Alegre – Brasil. Porto Alegre, p. 189-204.

Mendez Vives (1992, 10ª ed.): El Uruguay de la modernización. Historia Uruguaya. Tomo 5. 1876-1904. Montevideo.

Millot, J. et al. (1973): El desarrollo industrial del Uruguay. De la crisis de 1929 a la post-guerra de la Segunda Guerra Mundial. Montevideo.

Millot, J./Bertino, M. (1996): Historia económica del Uruguay. Tomo II. 1860-1910. Montevideo.

Moreira, C. (2000): La izquierda en Uruguay y Brasil: cultura política y desarrollo político-partidario. En: Mallo, S./Moreira, C. (eds.): La larga espera. Itinerarios de las izquierdas en Argentina, Brasil y Uruguay. Montevideo, p. 127-170.

Müller, G. (1993, 2ª ed.): A economia política gaúcha dos anos 30 aos 60. En: Dacanal/Gonzaga, p. 358-402.

Nahum, B. et al. (1994): El fin del Uruguay liberal. Historia Uruguaya. Tomo 8 – 1959-1973. Montevideo.

Navarro, Z. (1997): Um análise do Orçamento Participativo: sua implantação e desenvolvimento. En: Genro, p. 179-236.

Novy, A./Fernandes, A. (1999): Krise als Normalzustand? – Kleine und große politökonomische Veränderungen in Brasilien. [¿Crisis como cotidianidad? Cambios menores y mayores en la economía política brasileña]. En: Feldbauer, P. et al. (ed.): Von der Weltwirtschaftskrise zur Globalisierungskrise (1929-1999). Wohin treibt die Peripherie? [De la crisis mundial a la crisis de la globalización. ¿Hacia dónde marcha la periferia?]. Viena/Francfort del Meno, p. 161-182.

Noya, N. et al. (1998): Uruguay. En: Fanelli, J.M./Medhora, R. (ed.): Financial Reform in Developing Countries. Ottawa, p. 156-193.

O'Donnell, G. (1996, 2ª ed.): El estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas, crisis. Buenos Aires.

ONG Solidariedade (2003): Caminhando para um mundo novo. Orçamento participativo de Porto Alegre visto pela comunidade. Petrópolis.

Percovich, M (1998): Die Linke an der städtischen Macht. Interview mit der Frente Amplio-Abgeordneten Margarita Percovich. [La izquierda en el poder local. Entrevista con la diputada del Frente Amplio Margarita Percovich]. En: *ila*, 217, p. 17-20.

Pesavento, S.J. (1993, 2ª ed.): A República Velha gaúcha: “estado autoritário e economia”. En: Dacanal/Gonzaga, p. 193-228.

Pesavento, S.J. (1997, 8ª ed.): História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.

Pinheiro, I.V. (s/f): Novos elementos na arena de negociações entre setor público x privado. Porto Alegre (mimeo).

Pont, R. (1999): O papel dos governos petistas no projeto partidário. En: Magalhães, I. et al. (ed.): Governo e cidadania. Balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo, p. 35-45

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (1993): As idéias que vão mudar a cidade nos próximos anos. Porto Alegre.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (s/f): III Congresso da Cidade. Porto Alegre.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria do Planejamento Municipal (2000): Trajetória do Projeto Cidade Constituinte e a reformulação do Plano Diretor. Período pesquisado janeiro de 1993 – março de 2000. Porto Alegre.

Reichel, H.J. (1993, 2ª ed.): A industrialização no Rio Grande do Sul na República Velha. En: Dacanal/Gonzaga, p. 255-273.

Reichel, H.J./Gutfreind, I. (1998): As raízes históricas do Mercosul. A Região Platina Colonial. São Leopoldo.

Risso Ferrand, M. (1989): Descentralización territorial en Uruguay. Evolución y situación actual. Montevideo.

Silva, F.J.H. da (2000): A política habitacional no 3o mandato da administração popular. En: Pont, R. (coord.): Porto Alegre: uma cidade que conquista. A terceira gestão do PT no governo municipal. Porto Alegre, p. 153-164.

Stolovich, L. et al. (1987): El poder económico en el Uruguay actual. Montevideo.

Targa, L.R.P. (1996a): O Rio Grande do Sul: fronteira entre duas formações históricas. En: Targa, p. 17-47.

Targa, L.R.P. (1996b): Violência revolucionária e fundação do Estado burguês. En: Targa, p. 81-92.

Targa, L.R.P. et al. (1998): O Rio Grande do Sul e o mercado nacional. En: Targa, L.R.P. (ed.): Breve inventário de temas do sul. Porto Alegre, p. 225-270.

Texto GT (2002): Rompiendo nuestros limites – Una primera evaluación de los puntos de estrangulamiento que vivimos en el proceso del Presupuesto Participativo de Porto Alegre. En: Verle, J./Brunet, L. (org.): Construyendo un nuevo mundo. Evaluación de la experiencia del Presupuesto Participativo en Porto Alegre – Brasil. Porto Alegre, p. 12-24.

Vaillant, M. (1996): Uruguay. Comercio, fronteras políticas y geografía: un enfoque regional de la integración económica. En: Fundación para el Desarrollo Regional y Local/Fundación Friedrich Ebert (ed.): III ciclo de foros multisectoriales sobre cuestiones estratégicas de la Argentina – año 1996. Córdoba, p. 107-120.

Veneziano Esperón, A. (2001): Descentralización y participación: elecciones locales en Montevideo. En: Laurinaga, E. (ed.): La geografía de un cambio. Política, gobierno y gestión municipal en Uruguay. Montevideo, p. 121-152.

Verle, J. Brunet, L. (2002): Construyendo un nuevo mundo. Evaluación de la experiencia del Presupuesto Participativo en Porto Alegre – Brasil. Porto Alegre

Winn, P. (1975): El imperio informal británico en el Uruguay en el siglo XIX. Montevideo.

Zaions, D./Costa, I. (1998): Caracterização do desemprego na RMPA. En: Indicadores Econômicos FEE, 26(2), p. 226-251.

Zubillaga, C./Perez, R. (1996): La democracia atacada. En: Astori et al., p. 1-36.

Brecha (Montevideo), diversos números.

De Olho no Orçamento (Porto Alegre), 1999, 5(9).

